

# El dilema de la historia obrera reciente: revolución pasiva y acumulación de fuerzas en 1970-1982

Carlos San Juan

## Un presente con historia

Desde febrero de 1982 la sociedad nacional vive otra fase recesiva, aún más intensa que las registradas en 1971 y 1976-1977. El crecimiento del 8% en promedio del Producto Interno Bruto (PIB) y la creación de 900 mil empleos anuales, logrado en pleno auge petrolero, se desplomó en el curso del año pasado. Un cuadro general de la recesión indica: desde febrero de 1982 hasta enero de 1983 pierden su trabajo 1 millón 200 mil obreros y empleados<sup>1</sup>. La caída acentuada de la producción industrial ocurre en ramas como la automotriz, textil, metal-mecánica, construcción, química y petroquímica. Los cuatro y medio millones de empleos creados entre 1978 y 1981 sufren una severa reducción. Con una "reserva" de 6 millones de desempleados y 5 millones de subempleados, el mercado de trabajo se desborda por el exceso de oferta de mano de obra<sup>2</sup>. La base industrial trabaja al 40% de su capacidad instalada, y la inversión pública y privada se paralizan. La escasez de divisas amenaza los suministros tecnológicos mínimos de operación de las empresas y la inflación del 100% incrementa los costos y reduce el mercado. La producción agrícola también cae.

En el contexto de esta recesión aguda, la nueva administración del estado formula una política de estabilización monetaria, liberalización de precios y recortes de subsidios que desde diciembre de 1982 empieza a generar fricciones con las organizaciones obreras, con pequeños productores y otros estratos empresariales. En el terreno laboral, la virtual paralización productiva endurece las posiciones empresariales hacia los trabajadores. De ahí que se adopten medidas como recortes de personal, reducción del salario, intensificación del trabajo, desconocimiento de derechos y prestaciones ganados en el periodo de auge petrolero; que son prácticas cotidianas

---

contra los sindicatos, oficiales, blancos o democráticos.

Las iniciativas y pronunciamientos de las direcciones sindicales oficiales, los roces con sectores de la administración estatal, las luchas obreras en fábricas y los llamados de las corrientes sindicales democráticas para unificar fuerzas de oposición, conforman un complejo tejido de iniciativas y contradicciones entre fuerzas sociales, que abren un nuevo episodio, difícil de predecir, en una historia ya larga de conflictos y desequilibrios, larvada desde la modelación del México industrializado en los años cuarentas, pero que adquiere perfiles nuevos y propios en los últimos doce años de crisis recurrente. La coyuntura, como verdadera condensación de contradicciones, abriga posibilidades de creación histórica, de innovación política. Y sin embargo, cada coyuntura es fruto de diversos procesos, de múltiples historias que es posible rastrear, armando su genealogía. Los acontecimientos sociales no están sujetos a una espontaneidad absoluta de creación social. Como hilos sueltos, propicios a múltiples combinaciones, las historias pasadas atraviesan el terreno de lo nuevo, crean marcos de posibilidades, sean estructurales o de correlación de fuerzas. En sociedades hegemónicas, con avanzados procesos de organización de sus clases y de sus conflictos, este condicionamiento es más intenso. Tal es, en nuestra hipótesis, el caso de México. Sociedad heterogénea y desigual, concentra sin embargo en sus segmentos urbanizados e industriales, formas avanzadas de organización social.

En esta perspectiva, la coyuntura abierta con la recesión productiva y la intensificación del conflicto social desde 1982, condensa contradicciones y nuevos desarrollos que, de manera generosa, brotan y se consolidan en los últimos doce años. En ellos las fuerzas sociales conocen turbulencias económicas y políticas desacostum-

bradas por 16 envidiables años de estabilidad. En ese laboratorio agitado recrean sus prácticas y sus ideas, y es este entramado de prácticas sociales lo que se precipita en la crisis.

Dos supuestos parecen centrales para avanzar en su análisis: a) La sociedad nacional, con formidables obstáculos a enfrentar, ha mostrado en estos doce años de ciclos cortos con fases de auge y estancamiento con inflación, que no es una sociedad regresiva, tampoco estancada o en proceso de descomposición social. Tiene reservas de expansión económica y capacidad para transformar sus formas de dominación política. No se desconoce el modo desequilibrado y parcial en que estas reservas expansivas entran en juego, que por lo demás ha sido documentado por la izquierda del país. Se subraya, en todo caso, que el escenario profundo de los conflictos sociales no es el de una sociedad en bancarrota. b) Las fuerzas sociales operan en un verdadero *sistema hegemónico*. Su proceso de construcción, cristalizado en el estado mexicano, converge a la vez, con la transformación de las fuerzas sociales en fuerzas organizadas. Lejos de ser ajeno a la construcción de dichas fuerzas sociales y a los conflictos que le impulsan, el estado es una *forma histórica* de organización de ellas y de sus conflictos. El ciclo histórico de la revolución mexicana incide en el mundo industrial como una organización institucional de la lucha de clases, que a la vez que reconoce derechos sociales avanzados y otorga sólidas bases materiales al consenso, supedita a los obreros organizados como base de masas estatal, fuente de su poder político e ideológico; regulando además el conflicto industrial para promover el capitalismo.

En este medio histórico, la hegemonía existe como una relación armada por *aparatos* entretreverados, tanto de creación popular como estatal, por medio de la cual se vincula el estado con la sociedad, y en particular, con las clases popu-

---

lares. Son relaciones no circunstanciales, ni espontáneas. Arrastran procesos de armazón institucional tras de sí. La hegemonía como red de aparatos, al penetrar a las organizaciones populares, está inmersa en procesos de constitución de fuerzas discontinuas, heterogéneas y autónomas. En el extremo, cada fábrica, cada sindicato, tiene una historia propia. En estos espacios se constituyen relaciones sociales que generan, por ellas mismas, formas de poder y de lucha, saberes de poder, de resistencia y de gestión de la producción irreductibles y específicos. La hegemonía engarza y centraliza, propone formas de organización de estas células microsociales, pero no las crea ni crea sus conflictos.

¿Cómo reacciona esta sociedad expansiva y hegemónica, su organización de la lucha de clases industrial, en el periodo de crisis recurrentes y de turbulencias sociales y políticas? ¿Qué contradicciones genera y qué perspectivas de reestructuración o desestructuración presenta? ¿Cuáles son los ritmos y las vías de extensión probadas por la oposición sindical, y sus perspectivas en la crisis presente?

Intento avanzar en la concreción de esta problemática a través de cuatro apartados. En primer lugar, examino qué efectos acarrea las fases de estancamiento con inflación sobre la clase obrera. El objetivo es sugerir cómo la crisis económica se traduce en crisis social en un medio hegemónico, afectando a las organizaciones obreras y al sistema de dominación del cual forman parte. En segundo lugar se indican cursos probables de recomposición del sistema de dominación, donde convergen iniciativas no siempre similares de las direcciones sindicales oficiales y del estado a la vez. Se apunta además, cómo esta recomposición es contradictoria, de manera principal entre las direcciones sindicales y el estado. En tercer lugar se indican cuáles son, a nuestro juicio, las características centrales

de la oposición sindical, los problemas acumulados que arrastra y los que nacen de una nueva situación, aún más profunda, de estancamiento e inflación. La cuarta parte presenta, a manera de conclusión, un cuadro de problemas que por la acción del estado, de las direcciones sindicales y de la oposición sindical, concurren como campo probable de alternativas en estos momentos de crisis reiterada.

#### La crisis contenida

El año de 1971, de "atonía", muestra una serie de rasgos económicos que se repetirán puntuales en otros años de crisis. La súbita contracción del gasto público, justificada como paso imprescindible para combatir los graves déficits del sector público y del sector externo y la consiguiente reducción de la inversión privada, provocan la entrada en escena de uno de los fenómenos persistentes en la década: el violento crecimiento del desempleo. A su vez, el grave deterioro en la producción agrícola y los rezagos de la industria de bienes-salario, se anuncian demolidores en 1973 con escasez, acaparamiento e inflación crónica. La reducción de la producción y los incrementos de precios, el estancamiento con inflación afecta por varias vías la posición de los sindicatos a) La masificación del desempleo desequilibra a los diversos mercados de trabajo, calificados o no calificados. b) La inflación, como fenómeno surgido de rezagos en la producción, no puede controlarse con medidas "circulacionistas", por ejemplo, las bruscas reducciones de la demanda por recorte salarial, o bien su contrario, aumentos de salario. Mientras persista la contracción productiva, la inflación permanece y provoca una continua redistribución del ingreso a favor del capital. c) La caída de la producción, a la vez que mantiene fenómenos macroeconómicos como el desempleo masivo y la inflación

---

crónica, se convierte en arma empresarial en la microeconomía, quienes para "racionalizar costos", endurecen sus posiciones, incluso hasta el desconocimiento de los derechos conquistados por los trabajadores.

El estancamiento con inflación provoca entonces un debilitamiento efectivo que afecta al conjunto de los sindicatos. Reduce su capacidad, cuando la tienen, para regular el mercado de trabajo, asegurar el empleo fijo de sus agremiados y preservar la capacidad adquisitiva del salario.

La persistencia del estancamiento con inflación en 1976-1977 y 1982-1983, a la vez que cancela fases de expansión de la economía, amenaza los avances logrados por los trabajadores en los años de auge. En 1977 los aumentos de emergencia ceden el paso a los topes salariales, mientras que el brutal recorte del gasto social del estado afecta los recursos de la seguridad social. En lo que va de 1983 no sólo el salario es recortado, sino que la existencia misma de las prestaciones es amenazada. Por ello, las fases recesivas que hasta ahora ha vivido la clase obrera combinan debilitamiento sindical con ataques a los derechos ganados en las fases expansivas. Lo que importa subrayar es que, por la concurrencia de estos factores, la capacidad de negociación de los sindicatos se debilita.

Los eslabones fuertes del sistema de dominación sindical, es decir las franjas organizadas y ubicadas en lugares estratégicos de la economía, fundan sus bases de consenso en tendencias ascendentes del salario real, cierta garantía sobre el empleo, seguridad social y prestaciones, logros posibles mientras dura el "desarrollo estabilizador". El estancamiento con inflación erosiona las bases de consenso y difícilmente es compatible por un largo periodo con este "modelo" de dominación. Sin embargo hasta ahora la recesión estalla, de forma concentrada, en periodos cortos que cuentan con una "reserva" de relativo

aumento en el nivel de vida, producto de los años de auge que las anteceden. Al ocurrir en medios hegemónicos, su expresión social no resulta en repentinos y drásticos desgajamientos de bases sociales, sino como una concentración de tensiones al interior de los sindicatos, es decir, como una *crisis de reestructuración de los organismos sociales*, y en este caso, de los sindicatos.

Esta crisis de reestructuración oscila entre el polo de las demandas cada vez mayores de las bases sindicales, y el polo del recorte real del monto de concesiones que los líderes sindicales manejan. En cada sector industrial, en cada empresa, se anudan historias específicas de alianzas o contradicciones entre líderes, empresas y autoridades, o bien, modos de reprimir y de "hacer" base social, que pueden flexibilizar o hacer más rígidos estos polos. Confluyen también maneras de inconformidad y resistencia, procesos incipientes o avanzados de democratización que inciden en dichos polos. Por ello, la crisis de reestructuración de los organismos sociales es un *proceso abierto*, ya sea para reajustar los consensos y la coerción de los líderes oficiales, ya sea para avanzar y consolidar a las fuerzas democráticas, dependiendo de la manera en que confluyan, en cada caso, todos estos factores.

### El cambio de piel I

En la primera mitad de los setentas, las iniciativas del estado y de las direcciones sindicales coinciden para readecuar la dominación por tres vías: una política laboral flexible que acepta demandas de aumentos generales de emergencia del salario, la extensión de la seguridad social fundando nuevos aparatos estatales y la represión selectiva a núcleos de oposición sindical.

Sin embargo, la mutua concertación es accidentada, transcurre por nuevas circunstancias y

propicia nuevas tensiones. El proyecto de modernización echeverrista, exigido por desajustes visibles en la economía y en la política, incide entre 1971 y 1973 en equilibrios políticos consagrados por el desarrollo estabilizador, y que a su amparo propician una nueva madurez de las fuerzas sociales de la industrialización. El replanteamiento de los esquemas de financiamiento estatal y los intentos de tibia democratización de la vida política, provocan la desconfianza inicial y la final oposición de las organizaciones empresariales y obreras, cada una afectada por motivos distintos. A fines de 1973, la conducción estatal de las principales fuerzas organizadas, con diferente intensidad, es puesta en entredicho. El estado propicia un viraje restableciendo alianzas con las organizaciones obreras y se abre otro periodo donde las organizaciones obreras y el estado se reajustan, a la vez que la embestida empresarial continúa. Sin embargo, en el corto tiempo de experimentación del proyecto echeverrista, y en el espacio creado por el reacomodo de fuerzas, cobran nueva presencia núcleos de oposición sindical, no reductibles ni a la crisis económica, ni a los reacomodos de fuerza, con una historia sectorial y regional propia, que confluyen en esta nueva "circunstancia histórica".

El modo en que ocurre el reajuste entre estado y organización obrera, sugiere cierta autonomía de la burocracia sindical: responden presas al viraje del ejecutivo, pero además extienden la factura. La disposición estatal por ampliar su base material de consenso, con una política salarial flexible y ampliando los aparatos asistenciales, es capitalizado por las direcciones para recuperar "su" consenso y ejercer de forma más abierta la represión a núcleos de oposición. De esta manera las direcciones tradicionales se reafirman hacia abajo, como gestoras indiscutibles de las demandas obreras, y hacia arriba como

fuerza política central para lograr los equilibrios estatales.

Pero la readecuación del sistema de dominación ocurre en el marco de agudas fluctuaciones de la economía, que anuncian contradicciones entre la estabilidad del sistema de dominación y el modo de gobierno de la economía. En efecto, en el curso del ciclo largo de expansión económica (1954-1970) el estado especializa formas de "gobierno" de la economía centrados en el predominio de sus aparatos financieros y monetarios (Hacienda y Banco de México) y en mecanismos monetario-financieros. El objetivo: fomentar el ahorro, regular la demanda, subordinar la inversión pública a los requerimientos de infraestructura industrial, crear un sistema de precios favorable a la industria que asegure transferencias masivas de los excedentes agrícolas y del sector público y que mantiene la estabilidad de los salarios. Este marco institucional aseguró amplios márgenes de utilidades empresariales, pero además *un modo* de dominio sobre los segmentos organizados de la clase obrera. En este ciclo de expansión, la estabilidad de los salarios no implicó una tendencia regresiva o estancada de los mismos. Al contrario, fue posible registrar aumentos efectivos en el salario real<sup>3</sup>. Fue posible implementar entonces un modo de *dominación* con cierto margen de *compromisos* hacia los asalariados. Evidentemente, el modo específico en que este margen estructural de compromiso se concreta en sectores y empresas, es filtrado por sus historias específicas de dominación y resistencia que, de manera principal, determinan las combinaciones particulares entre consenso y coerción en que se sustentan las direcciones sindicales. De esta manera el "gobierno" de la circulación monetaria y financiera pudo operar como marco político eficiente para procesar *compromisos estables* entre el capital y el trabajo.

---

Cuando el escenario cambia e irrumpen los ciclos cortos con estancamiento e inflación recurrente, también entra en crisis este marco político. Frente a la virtual paralización de la inversión privada por el agotamiento de las áreas tradicionales de inversión y el brusco descenso en las transferencias de otros sectores hacia la industria, ni las políticas de restricción monetaria que ahondan la recesión, ni las expansivas del circulante que espolean inflación y estrangulamiento externo por el peso de la deuda, pueden procesar equilibrios durables entre el capital y el trabajo.

La manifiesta ineficiencia de la política económica tradicional, no es sino la punta de un iceberg que anuncia una masa de transformaciones, no reductibles a readecuaciones técnicas o modificaciones institucionales, que aunque las abarque, apunta a toda la organización de clases que supone el estado y su *modo* de articulación con la economía. Está en juego una reformulación de "época" de la política y la economía no sólo de cara a los ciclos cortos, al *ritmo* del desarrollo, sino a toda una nueva *fase* de crecimiento y de madurez de la sociedad.

Presa de esta dinámica histórica, la organización de clases que es el estado, queda sujeta a contradicciones que pueden intensificar los conflictos en su interior y que incluso pueden provocar modificaciones de su estructura. Destacan tres de ellas que sugieren los alcances y la intensidad de estas contradicciones: a) En el contexto de una inestabilidad estructural, la política económica provoca en el corto plazo bruscas fluctuaciones en la producción, los salarios y el empleo, de esta manera, afecta intensamente al "modelo" de dominación sindical. Por la experiencia de estos años turbulentos, las viejas direcciones tienen que despertar del marasmo gremial cultivado en el invernadero del desarrollo estabilizador, y asumir como "suyo" el proble-

ma de la política económica global. En estos años se hace patente su virtual exclusión de los centros de poder en materia económica del ejecutivo, que se agudiza además por la extrema especialización en la negociación gremial. En contraparte, las direcciones reafirman su interlocución directa con el ejecutivo, sin la mediación del PRI, y aseguran una cuota importante de diputados federales que refuerza su capacidad de lucha institucional. b) La permanencia de los aparatos financieros y monetarios, como centros predominantes de regulación económica, intensifica los conflictos entre los diversos grupos de la burocracia estatal. En una de sus vertientes, se promueve el surgimiento de otros aparatos centrados en la relación entre expansión del gasto y la promoción directa de la producción. En el periodo echeverrista crecen las funciones de la Secretaría de la Presidencia, posteriormente se funda la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) y se remodela la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN). Es una gestación aún indefinida y tortuosa, con bruscos virajes a favor de los viejos aparatos, como la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. c) El gasto estatal se expande obligado por el reajuste de la base de masas y por diversos proyectos de modernización de la infraestructura. Con la crisis fiscal amplificada se perfilan dos cursos de probable recomposición financiera del estado. En uno de ellos se impone la racionalización y modernización del enorme Levitán, que deberá entonces enfrentar la avanzada "feudalización" de sus aparatos por camarillas de la burocracia política en connivencia, no pocas veces, con las direcciones sindicales. La modernización es entonces un proyecto político que puede, dependiendo de las circunstancias, enfrentar la oposición de los dirigentes sindicales en el área paraestatal y en las secretarías de estado. En el sexenio de José López Portillo este

conflicto ocurre de manera intensa y pública entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En el otro curso de la recomposición financiera, la redistribución del excedente interno se hará imprescindible sobre todo si se dificultan las salidas "externas" para resolver dicho financiamiento público (deuda externa y exportaciones). En este caso, se abre una lucha por las "cuotas" a repartir entre el sector público y el sector privado, que implicará un reajuste conflictivo de relaciones con los grupos empresariales. Entonces el estado se apoyará en mayor o menor grado en su "base de masas", dependiendo de la intensidad de estos conflictos.

## El cambio de piel II

Entre 1977 y 1982 la labor para rehacer al sistema de dominación pasa por nuevos conflictos y desarrollos. En el breve espacio de seis años se registra: una depresión sin precedentes (1977-1978), un impetuoso crecimiento de la producción y del empleo (1979-1981), y el inicio de una nueva recesión aún más pronunciada (1982-1983). Entre 1977 y 1978 el estancamiento con inflación converge con una rigurosa política de reestructuración financiera y de férreo control salarial. Los incrementos generales y de emergencia cedén el paso a los "topes salariales". Las dirigencias, garantes del compromiso obrero de reducir las demandas salariales a cambio del abastecimiento empresarial de bienes básicos, quedan atrapadas en este intercambio que sólo cumplen los obreros y que somete a fuertes tensiones al sistema de dominación. La protesta obrera se extiende y diversifica por nuevos espacios sociales, la escasez y la inflación carcomen el nivel de vida y la política de estabilización se mantiene a pesar de las insistentes peticiones sindicales de cambiar el rumbo. En esta

intensificación de contradicciones las direcciones sindicales, en particular la CTM, lanzará nuevas iniciativas que de manera potencial sugieren el desarrollo de rasgos de autonomía y de capacidad de renovación.

En parte por los compromisos que le supeditan a la política del ejecutivo, las direcciones incursionan por una reformulación de las demandas obreras frente al estancamiento con inflación. En el plano estricto de la negociación con la empresa, la restricción de la demanda salarial es atenuada ampliando las demandas por prestaciones y por la creación de tiendas sindicales que aseguren el abasto. El deterioro de la capacidad de negociación que acarrea el estancamiento con inflación, conduce a formular el problema de la producción y de la productividad como propuesta obrera para arrancar compromisos de bonificaciones y de reinversión de utilidades. Esta reformulación de las demandas obreras en condiciones de estancamiento con inflación concluye con la elaboración del Contrato Tipo<sup>4</sup>.

Por otro lado, y también encabezadas por la CTM, las dirigencias recorren un importante tramo en su conformación como fuerzas políticas capaces de gestionar no sólo las demandas del gremio sino, además, de participar en la definición de la política económica al plantear la Reforma Económica. Con ella se propone una *política de producción* que "revierta los términos de la acumulación del capital a favor del estado y del sector social". Se pide entonces no sólo un cambio en el modo en que se articula el estado con la reproducción del capital, es decir un cambio en los modos de "gobierno" de la economía, sino además el replanteamiento mismo del esquema de la reproducción: una base de masas requiere de la producción de masas y del mercado de masas. Para lograrlo, y ante la ineficiencia y desinterés de los sectores empresariales, deberán estatizarse áreas de la producción in-

---

dustrial, en particular las ramas de bienes básicos, que deberán pasar a integrar un "sector social" bajo control obrero.

Sin embargo, esta iniciativa lejos de coincidir con la política estatal, como ocurre sobre otros puntos en el segundo periodo echeverrista, se opone globalmente a ella. Entre fines de 1977 y a lo largo de 1978 y 1979 la férrea negativa del estado a las propuestas de las direcciones, la persistente escasez e inflación de los productos básicos y la continuidad de la política estabilizadora, obligan el despliegue de variados recursos políticos por medio de los cuales las direcciones buscan ganar autonomía, fuerza y legitimidad para sus demandas. Con el proyecto de la Reforma Económica las organizaciones obreras logran una cohesión política en el Congreso del Trabajo y se orientan explícitamente, como una fuerza estatal con un programa político propio. Además pasan a una ofensiva por ganar diversas posiciones en instituciones estatales: desde las directamente ligadas al gremio, como las Juntas de Conciliación, el IMSS y demás aparatos asistenciales, hasta los intentos por controlar puestos claves en el PRI, regateos por incrementar su "cuota" de representantes en el sistema político, y en particular, sus esfuerzos por integrar un "bloque de diputados obreros" dispuestos a dar la batalla legislativa por las demandas obreras. Este proceso a la vez que unifica centrales, provoca serias diferencias que abren fisuras potenciales entre las organizaciones. La CTM monopoliza gran parte de los espacios abiertos ante el descontento de las otras centrales. Otra novedad es el paso de sus antiguas posiciones de cerrazón y suficiencia al impulso de una flexible política de alianza, iniciada por la COR y retomada por la CTM. Con acercamientos a intelectuales e instituciones como el Colegio de Economistas, la relativa apertura hacia actos de consagración de la nueva unidad obrera, como la reunión para la Reforma

Económica donde se permite la presencia de sindicatos democráticos, los dirigentes intentan ganar legitimidad y amplios consensos para su programa.

En todos estos nuevos desarrollos, los dirigentes se proponen incrementar su fuerza dentro del estado, supeditándose a sus estructuras y a sus procedimientos, es decir, a la "lucha institucional". Las peticiones al Presidente y la lucha legislativa se proponen como formas de presión únicas. Descartando otras, también legales, como los emplazamientos a huelga masivos y las movilizaciones, que hacen difíciles las "reglas del juego" que impone a las máximas dirigencias el conflicto institucionalizado para reconocerlas como interlocutores confiables. Es decir, no se plantea un proyecto de fuerza "fuera" del estado sino dentro de él.

Al margen de la suerte inmediata de este proyecto, que en el sexenio de JLP termina de forma lamentable (sólo se aprueba una de sus diez propuestas legislativas que además sufren un virtual congelamiento legislativo, también se bloquea su participación en las decisiones económicas centrales del ejecutivo); en estos años se manifiestan las *bases objetivas* de conflictos que anuncian la probable intensificación de contradicciones en el interior del estado. La dimensión de estas contradicciones no sugieren enfrentamientos "catastróficos" que provoquen coyunturas de desarticulación sindical o estatal. Según su experiencia inmediata, provocan fricciones —irrelevantes desde una óptica derrumbista— en el *modo* en que se procesa la dominación con el compromiso, que tienen una serie de efectos novedosos e importantes desde la perspectiva de una progresiva y persistente acumulación de fuerzas. La unidad de centrales que consigue la CTM, además de las fisuras creadas por su voraz concentración de poder, enfrenta una escasa disposición del estado para reconocerla como fuerza



con un proyecto propio, dispuesto a un recambio de interlocutores dóciles a las orientaciones del ejecutivo. Es posible entonces una situación impredecible de roces y reorganización de las centrales. Por su experiencia inmediata, son probables también iniciativas de las direcciones sindicales que produzcan tensiones y abran situaciones novedosas en el sistema de dominación. Por ejemplo, en coyunturas como las de 1978 y 1979 bajo la presión del descontento generalizado de los asalariados y por el motivo concreto de las huelgas de telefonistas, los dirigentes se ven obligados a reivindicar el derecho de huelga y a coincidir con fuerzas tan dispares como la Unidad Obrera Independiente (UOI) y los universitarios en el apoyo solidario a los telefonistas. La formulación del Contrato Tipo puede dar cobertura a luchas democráticas que incidan en la producción y en la ampliación de prestaciones. Su búsqueda circunstancial de aliados y de consensos puede permitir unificaciones momentáneas que favorezcan tareas concretas e inmediatas de la acumulación de fuerzas.

Es evidente que el interés subjetivo de las direcciones con todas estas iniciativas es la reestructuración y expansión del sistema de dominación que usufructúan, pero, subrayemos, el *modo objetivo* en que ello ocurre en un medio sujeto a la crisis de reestructuración de las organizaciones sociales muestra una serie de facetas interesantes en el periodo 1977-1982. De manera sintética indicaremos algunos de sus rasgos:

a) La incidencia del estancamiento con inflación en 1977, los topes salariales y el viraje de las direcciones sindicales de la negociación centralizada por aumentos de emergencia a la negociación empresa por empresa, provoca un debilitamiento general de la fuerza de negociación de los sindicatos; pero además genera una mayor extensión e intensidad de la protesta obrera, que se extiende por más ramas industriales y contamina también a los asalariados de servicios públicos<sup>5</sup>.

b) En el curso de las negociaciones los sindicatos deberán optar entre la conservación del empleo o los aumentos salariales, o bien alguna combinación entre estas dos. La caída real de la producción y la reducción del mercado permite que las empresas endurezcan sus posiciones, ya que los recortes bruscos de personal o los cierres temporales les permiten capear el temporal de la crisis. En consecuencia, la fuerza negociadora de los sindicatos es disminuida. En estas condiciones se intentan dos salidas laterales: centrar la negociación en prestaciones o bien negociar con acuerdos de productividad. Tanto la *dominación* como la *acumulación de fuerzas* tienen que operar en esta situación objetiva de reducción del terreno de negociación. El problema central desde la perspectiva de los procesos democráticos dispersos y localizados, aún con tareas de consolidación y profundización de la democracia sindical, es el de reconvertir la debilidad en capacidad de negociación y de continuidad de los procesos. En contrapartida, no pocas fuerzas asumen como problema central "romper" el tope salarial a escala nacional con huelgas aisladas y locales. En el mejor de los casos se obtienen aumentos por encima del tope sin que esto provoque reacción social alguna, como ocurrió en ciertas negociaciones de la UOI. En el peor de los casos, los compromisos entre las direcciones sindicales y el estado no dudan en desgastar primero, y después exhibir, como disciplina social, las derrotas de huelgas prolongadas.

c) Las difíciles condiciones de negociación y la reducción virtual del monto de concesiones por parte de los líderes, abre nuevos terrenos de lucha o intensifica los anteriores. Las direcciones responden a la crisis de reestructuración ya sea con la táctica de negociar empresa por empresa que en los sectores fuertes del proletariado, por su mayor organización y su ubicación estratégica, permite negociar de acuerdo a la productividad, de manera especial en empresas del área

---

privada. En sectores de paraestatales y de burocracia estatal, que permanecen controlados por los topes, se intenta una salida con relativo éxito entre electricistas y petroleros a través de la ampliación de prestaciones.

En la fase de auge, el estado flexibiliza su política salarial, se expanden los recursos para los aparatos asistenciales y aumenta el empleo. En estas condiciones, las direcciones pueden imponer un modelo de dominación que, como en el caso problemático del magisterio, masifica la corrupción. En cascada se ofrecen préstamos hipotecarios, automóviles, dobles plazas, etc.

En todo caso, tanto la negociación de acuerdo a la productividad, a las prestaciones, a la expansión de los servicios asistenciales y al desarrollo localizado de un sistema de abasto sindical, permiten que, de manera desigual, la crisis de reestructuración se resuelva en gran medida a favor de las direcciones sindicales. Pero la innegable extensión del consenso ocurre en un medio heterogéneo y sujeto a otros procesos autónomos. La recomposición hegemónica revela no pocas dificultades a escala regional, sectorial y de empresa. Por ejemplo, las fases recesivas se han combinado con fuertes procesos de *modernización* en ramas (metalúrgica, automotriz, petroquímica, química), y en los aparatos de estado (Reforma Administrativa). En estos segmentos, donde en algunas ocasiones se concentra el proletariado moderno y tecnificado, la crisis de reestructuración se funda además en los nuevos problemas que plantea la producción en cadena y la fordización del trabajo. En estos sectores las burocracias tradicionales están rezagadas en la comprensión de los nuevos problemas. En aspectos como la salud, ritmos de trabajo y convenios de producción, carecen de cuadros negociadores especializados sobre estas cuestiones. En una limitación que afecta a múltiples eslabones de la cadena de dominación que

pesa sobre los asalariados sindicalizados, e introduce discontinuidades susceptibles de uso alternativo democrático.

### La lenta marcha del viejo topo

Un panorama del sindicalismo al margen de las direcciones oficiales muestra dos grandes agrupamientos. Uno formado por sindicatos separados orgánicamente de las centrales oficiales, y otro por sindicatos inscritos en la estructura organizativa de dichas centrales. En el primer agrupamiento se distinguen:

—Núcleos de sindicatos universitarios que integran asalariados que no habían pertenecido, en su mayoría, a ningún sindicato. Son nuevos espacios donde la izquierda ha construido organizaciones.

—Núcleos del Frente Auténtico del Trabajo (FAT) con presencia en textiles, construcción, hierro, vestido, automotores, calzado, en la zona centro del país y con predominio de la pequeña y mediana industria. Se integra por adhesión de sindicatos que se desprenden de otras centrales.

—La Unidad Obrera Independiente (UOI) que penetra la gran industria transnacional y paraestatal, en automotriz, hule y química. Se integra atrayendo sindicatos de otras centrales.

—Núcleos del Sindicato de Obreros Libres (SOL) que agrupa a 18 sindicatos de transportistas.

—En una perspectiva sindical y política muy diferente, se ubica el sindicalismo blanco, la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) en el estado de México y la Federación de Sindicatos Independientes (FNSI) en Monterrey. El segundo agrupamiento se origina desde el principio de la década, pero de manera marcada a partir de 1977, cuando se consolidan núcleos democráticos al *interior* de las organizaciones sindicales oficiales, o bien, se afilian sindicatos democráticos al Congreso del Trabajo, como el

Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN). Se distinguen principalmente: —En la burocracia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que aglutina secciones y delegaciones democráticas del SNTE y que representa a más de 100 mil trabajadores. El sindicato de la Secretaría de Pesca afiliado a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Coordinadora Democrática de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

—En las paraestatales, las secciones democráticas 68, 147, 271 y 288 que agrupan a cerca de 30 mil metalúrgicos, afiliados al Sindicato Nacional Minero, Metalúrgico y Similares de la República; el SUTIN, el Sindicato de Tepepan y el Sindicato del Instituto Mexicano del Café.

—En las empresas con participación estatal, el Sindicato de Telefonistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

—En empresas privadas e integrantes de la CTM, los sindicatos de Acer-Mex, Nabisco y Textilmex, entre otros.

Con exclusión de los sindicatos blancos, en estas áreas del sindicalismo trabaja la izquierda en sus diversas, separadas y algunas veces encontradas manifestaciones. Cerca de 239 mil 276 trabajadores, el 9% de los trabajadores sindicalizados<sup>6</sup>, "viven" ya en espacios con procesos democratizadores. No existe entre ellos formas de unidad de acción y mucho menos coincidencias ideológico-políticas. No es una fuerza unida, aun cuando existen experiencias de coordinación local para ayudarse en las situaciones de huelga.

Sin embargo, la riqueza de esta área es producto de su dispersión. En doce años de persistente y lenta lucha, ha acumulado un conocimiento, aún fragmentado y disperso, de los diferentes espacios de trabajo y de lucha de los asalariados. Ciertamente que el estado fragmentario y diverso de este conocimiento da lugar a progra-

mas y proyectos de "unificación" que, al no reflejar muchas otras experiencias, provoca más distanciamiento. Pero sin este conocimiento "especializado" sería difícil pensar siquiera en la *permanencia* de los núcleos democráticos. El proceso mismo por el cual existen, arroja una serie de problemas, que, con ciertas excepciones, aún no se incorporan de manera sistemática para definir el alcance de sus fuerzas, así como las tareas posibles y necesarias.

En su enorme mayoría, el sindicalismo democrático ha costado un esfuerzo prolongado de corrientes sindicales. No se ha formado por alguna fractura masiva y repentina de las centrales oficiales. Cuando la UOI se funda, sus militantes tienen más de diez años trabajando en el medio obrero, igual ocurre con el FAT. En ese sentido, cada sindicato "ganado" implica un proceso de penetración inicial, de crecimiento interno y de consolidación final. De estas experiencias se comprueba que cada agrupación de trabajadores está inscrita en relaciones de poder y dominación específicas. Los intentos de democratización enfrentan en cada lugar alianzas y contradicciones *locales*, entre las direcciones oficiales, las autoridades, sean presidentes municipales o gobernadores y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Enfrentan además alianzas internas con segmentos de las bases obreras, que se expresan como maneras específicas de crearse una base social, desde el clientelismo hasta la represión localizada. La democratización es entonces un *proceso*. Tiene que desmontar este sistema de contradicciones con paso firme y paulatino y a la vez arraigarse y extenderse entre la base obrera. No es una lucha repentina, no es una guerra de movimientos aún y cuando existan levantamientos inesperados, como los ocurridos en las secciones magisteriales. Para arraigarse, y sobre todo para sostenerse, las luchas democratizadoras deben convertirse en un proceso, en una

---

guerra de posiciones. Los años de crisis, las fases de estancamiento con inflación acentúan la crisis de reestructuración sindical, pero por sí mismas no fracturan nada, sólo la existencia de procesos anteriores de democratización permite cortes efectivos en la cadena de la dominación hegemónica. Entonces las crisis de reestructuración de los organismos sociales pueden resolverse de manera continua a favor de la democratización.

A fines de los setentas, los destacamentos crecidos fuera de las centrales oficiales (UOI, FAT, SUNTU) disminuyen su expansión, sea porque los espacios sociales son más o menos cubiertos, como en los universitarios, sea porque la atracción de nuevos sindicatos enfrenta mayores obstáculos. Con las reformas procesales a la Ley Federal del Trabajo, puestas en vigor en 1980, los filtros legales que permitieron arrebatar sindicatos a las centrales son tapiados. En el panorama del sindicalismo de oposición quedan entonces como áreas de extensión: a) El 76% de los trabajadores asalariados, dispersos y carentes de sindicalización y b) Las centrales obreras oficiales. En estas circunstancias, la necesidad de plantearse los problemas de penetración y lucha al *interior de las organizaciones obreras oficiales* adquiere una vigencia histórica perentoria.

Las agrupaciones sindicales "fuera" de las centrales no necesariamente se encuentran fuera de la organización institucional de la lucha de clases y de su entramado de aparatos. En un camino difícil, las fuerzas universitarias han tenido que aprender a desarrollarse sujetas a los procedimientos y a las instituciones de regulación del conflicto del estado. En ese trayecto, han conocido en la práctica cómo operan los mecanismos de desgaste burocrático y las argucias legales para desconocer la legitimidad de demandas y direcciones sindicales. Pero a la vez, se descubre que ese entramado institucional, esa verdadera

concentración de fuerza y de violencia que desarticula fácilmente a los movimientos sectoriales que intentan discurrir por sus márgenes, es también, como todo aparato, un terreno de lucha, un campo de maniobra, eso sí, con reglas precisas, escritas y no escritas.

La lucha *dentro* de los sindicatos oficiales adquiere perfiles más claros con experiencias que empiezan a hacerse visibles desde 1976, y que ocurre en los cotos más cerrados de la burocracia sindical. Telefonistas, metalúrgicos, magisterio y otros sectores de la burocracia, a la vez que demandan mejoras económicas, inician procesos democratizadores de sus respectivas organizaciones. Asimismo, la innegable fuerza nacional de las direcciones presenta fracturas e intersticios en los niveles microsociales de los sindicatos de empresa: las delegaciones sindicales o las secciones. Además de las posibles inconformidades dispersas o discontinuas, o bien las oposiciones persistentes y amplias, influye de manera particular que el gigantesco edificio del sindicalismo oficial muestra, en algunos casos, pies de barro: le escasean los cuadros medios y bajos capaces de gestionar los nuevos problemas de producción o de enfrentar procesos firmes de oposición sindical. Incluso en el apartado B, el más controlado, la democracia puede avanzar por los estrechos marcos de un régimen legal que no permite huelgas, como lo demuestra el magisterio chiapaneco y diversas delegaciones de la sección 11.

En estas experiencias se ensayan formas de lucha donde el desplazamiento de las direcciones oficiales es, a la vez, la invención de nuevas instancias participativas y decisorias de los trabajadores. Además, se formulan demandas que penetran en el proceso productivo (salud, ritmos, productividad) como iniciativas colectivas reguladoras de la producción, alimentando con más

motivos, aparte de las reivindicaciones salariales, a la acción de masas.

De los telefonistas, maestros y metalúrgicos, entre otros, fluyen nuevas y diversas experiencias fundamentales para desarrollar procesos *dentro* de las organizaciones oficiales. En cada movimiento, en cada coyuntura, aparecen combinaciones novedosas entre la lucha estatutaria y la lucha fuera de los estatutos; se recorren con firme rigor los procedimientos legales pero, acompañados por movilizaciones y presión de masas. Los movimientos aprenden el lenguaje de la negociación para no dejarse encerrar en luchas por el "todo o nada". Es un camino difícil, de verdadera creación colectiva y, por supuesto, de aprender a través de la prueba y el error.

Con diferentes ritmos e intensidades, algunos movimientos incursionan en otras facetas de esta peculiar organización institucional de la lucha de clases, que al reconocer derechos y prestaciones avanzadas, da cobertura legal a diferentes luchas. En particular las condiciones de trabajo y sus correlatos de seguridad y salud laboral, se exploran y se formulan como demandas de base, capaces de propiciar la movilización y la organización colectiva. Las difíciles condiciones de 1977 y 1978 son en parte sorteadas por algunos núcleos del sindicalismo democrático, ampliando las demandas de prestaciones y sometiendo a la negociación bilateral los ritmos de trabajo, como ocurre entre los metalúrgicos y sectores de automotrices. La lucha *dentro de las organizaciones oficiales* apenas iniciada, generará múltiples vías y experiencias aprovechables para que penetren, puedan consolidarse y se extiendan los movimientos democráticos.

En estos doce años, el sindicalismo democrático, al igual que todos los asalariados, ha sufrido los diversos efectos de una política económica anacrónica y del estancamiento con inflación. Es notorio su rezago para plantearse el

problema y generar iniciativas de verdadera concertación de fuerzas. Sobre la política económica los sindicatos universitarios han desarrollado planteamientos que tienen la ventaja de presentar un verdadero programa de gobierno nacional, pero la desventaja de no ofrecer puntos concretos de cohesión para movimientos diferenciados y dispersos. Por otro lado, la presencia del SUTIN y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) en las reuniones sobre Reforma Económica propuestas por los dirigentes oficiales, si bien presentaron fuertes limitaciones y gran discontinuidad, mostraron cierta posibilidad de acercamiento. Es también notorio el atraso de las organizaciones sindicales democráticas respecto al estancamiento con inflación y su principal problema: el debilitamiento de su capacidad de negociación y la relativa ineficiencia de las demandas puramente salariales. Igualmente son escasos los planteamientos sobre la producción y la productividad, sobre la manera de utilizar estas demandas en una acumulación de fuerzas y en sus tareas de penetración y consolidación en nuevos sectores obreros. Existen planteamientos recientes elaborados por los metalúrgicos, en particular la sección 147 de Monclova, que intentan explorar este terreno de cara a la nueva recesión anunciada en 1982.

Se han experimentado diversos intentos de unificación, desde intentos a escala nacional como el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP) o el reciente Frente Nacional en Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la Carestía (FNDESCAC) hasta coordinaciones sectoriales y regionales. Las unificaciones en torno a un programa han resultado efímeras e ineficientes para acordar apoyos solidarios. Las reuniones para pactar apoyos a luchas concretas o para intercambiar experiencias parecen responder más a los ritmos y problemas de las diferentes luchas democráticas.

## Los futuros posibles

El vértigo de la nueva fase recesiva no deberá ocultar su punto de partida: el complejo y diferenciado proceso de reestructuración hegemónica iniciado desde hace doce años. Es hegemónica porque ocurre de manera principal y masiva como una reorganización de las prácticas y aparatos generadores de consenso. Es diferenciado porque afecta de manera desigual a la gran masa de asalariados, incidiendo principalmente en sus sectores organizados. Su dinámica es la *ampliación* de los aparatos estatales insertos en la organización institucional de la lucha de clases y la *extensión* de prácticas renovadas de gestión sindical por parte de las direcciones oficiales. Es complejo porque: a) Se recrea a través de una intensificación de contradicciones entre las direcciones y un modo de gobierno de la economía, cristalizado en aparatos, personal de estado y margen de alianzas con sectores empresariales. Por la forma histórica de la crisis económica (ciclos cortos donde predomina el estancamiento con inflación) dicho modo de gobierno deja de funcionar como marco político para procesar de manera estable la dominación y el compromiso entre el capital y el trabajo.

b) Ocurre en un medio social sujeto a la crisis persistente de reestructuración de las organizaciones sindicales. La aguda recesión incide entonces en un proceso de recomposición *desde arriba*, que funciona como una eficiente revolución pasiva repleta sin embargo de contradicciones. Este proceso, lejos de ser ajeno, es respuesta directa a la intensificación de la protesta obrera. Y sin embargo, la recesión vuelve a agitar las olas de la inconformidad reabriendo la crisis de reestructuración de los sindicatos. Se plantea entonces un terreno incierto donde la *experiencia acumulada* de la revolución pasiva es sometida a una nueva prueba. Pero no sólo ella, de múltiples poros de la sociedad industrial

fluyen también las experiencias democráticas. A diferencia de la recesión registrada en 1977, la intensidad de la caída productiva y la fuerza de la inflación ahora aumentadas, coinciden con el cierre de las fuentes de financiamiento externo. Las crecientes dificultades para acceder al crédito externo y la caída del mercado petrolero augura entonces un *estancamiento prolongado*. Inflación, recesión y escasez de productos básicos por el reinicio de la crisis agrícola, otorgan bases materiales para una ofensiva capitalista contra los derechos de los asalariados, que pueden someterse a un desgaste también prolongado.

En este contexto, los aspectos de mayor ortodoxia financiera del programa de modernización estatal y de estabilización de la economía emprendidos a la vez que acentúan el deterioro de los derechos y el nivel de vida de los asalariados, retoman el hilo de conflictos anteriores, replanteando de nueva cuenta las contradicciones como un reajuste político urgente e inaplazable entre las organizaciones obreras y el estado.

La liberación de precios, el drástico recorte de subsidios al consumo popular, el compromiso de mantener un tope salarial del 25% frente a la escalada inflacionaria del 100%, dibujan en conjunto un "contrato social" que difícilmente podrán sostener las direcciones sindicales, ya que recorta sus márgenes de maniobra económica ante sus agremiados y someten a desgaste a sus bases de consenso. Las tensiones previsibles por estas causas, se anudan a otro historial de desencuentros entre las posiciones unitarias de las centrales nucleadas por la CTM y la administración actual. Desde el inicio de la campaña electoral se hace notorio el distanciamiento entre los futuros miembros de la administración estatal y el proyecto de Reforma Económica de las centrales. Al virtual rechazo de la Reforma Económica del programa de gobierno del candidato le sigue el desplazamiento del Plan de Solidaridad

Nacional —planteamiento de las centrales para establecer compromisos con los empresarios y ganar iniciativa política— por el Programa Integral de Reconstrucción Económica (PIRE) del Ejecutivo Federal, una vez que se inicia el despliegue del programa efectivo de gobierno.

En los primeros meses de gobierno se empieza a dibujar un cuadro de conflictividad institucional al interior del estado. El bloque de diputados obreros reformula algunas iniciativas fiscales del estado, a la vez que aumentan las presiones de las centrales para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sesione y apruebe un ajuste salarial. El ejecutivo mantiene rígida la política de salarios pero cede en algunos aspectos, por ejemplo al mantener ciertos subsidios a los productos populares y en las menores reticencias para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sesione. La tónica general es de una escasa sensibilidad a los planteamientos de las centrales, a pesar de todo.

En estas circunstancias la estabilidad política imprescindible para "aguantar" una recesión prolongada se hace difícil al menos por dos probables desencuentros. Lo agudo de la espiral —aumentos de precios, contención salarial— abre un proceso difícil de concertación entre las fuerzas sociales, donde las direcciones no pueden, a costa de sus cabezas, desentenderse del problema salarial, mientras que la actual política de salarios propone un control riguroso y prolongado de los mismos, como una de las vías principales en la lucha contra la inflación, encontrando un amplio respaldo entre las organizaciones empresariales. A pesar de ello, y por la magnitud de la inflación, no sería remota la posibilidad de un arreglo, parecido al ocurrido en 1973 cuando el plazo para las revisiones salariales se reduce a un año. Pero incluso la concertación de un plazo más breve de negociación salarial no puede garantizar bases durables de estabilidad si el ritmo

y la intensidad de la inflación continúan. Lo fundamental, insistimos, son los campos de contradicciones y de iniciativas políticas que se abren a su amparo. Ya sea por presiones para abrir un nuevo acuerdo sobre la negociación salarial, ya sea porque se logre dicho acuerdo, es probable que se intenten iniciativas de concertación unitaria por las direcciones sindicales en las que pueden confluir las fuerzas democráticas, o bien coberturas "oficiales" para impugnar por una recomposición del salario en sectores y empresas específicos.

Por otro lado, la unidad de las centrales y su relación con el ejecutivo es sometida a nuevas presiones. La CTM, eje aglutinador y de dirección de las centrales, enfrenta algunas dificultades que afloran en el curso de 1982. El punto culminante es el emplazamiento masivo de huelgas que realiza sin el apoyo de las demás organizaciones. Desde entonces se hace pública la relación difícil e incierta que priva entre ellas, en especial la difícil relación de la CTM con la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC), que desde fines del sexenio pasado se encontraba dispuesta a aceptar una línea de moderación y subordinación aún más acentuada. A pesar de ello, es previsible un proceso de unificación parecido al que se vivió en 1978 cuando bajo la batuta de la CTM, las centrales logran una unificación en torno al programa de la Reforma Económica. En este itinerario no es descartable que el ejecutivo intente un cambio de interlocutor a favor de alguna central más sumisa.

Pero otra vez, lo fundamental es que al calor de las probables iniciativas de unidad y de búsqueda de consensos y aliados para su programa, se creen coyunturas de acercamientos y concertación con fuerzas democráticas, y en defensa de derechos elementales puestos en peligro por la recesión prolongada. Tampoco es

---

lejano que los intentos, si los hay, de "recambio de hegemonía" entre las centrales, al margen de que puedan tener visos de éxito, provoquen nuevas fricciones en un terreno movedizo y cambiante para las alianzas y los rompimientos, e incluso para bruscos procesos de reorganización sindical.

En una escala más sectorial y regional; los conflictos entre la modernización estatal y el uso patrimonial de las dirigencias de los aparatos de estado, cobran nuevos y renovados bríos. PEMEX y la SEP son casos con probable extensión y desarrollo. Las secciones con una democratización consolidada en el SNTE (Chiapas y Oaxaca) propiciada y lograda por el empuje de masas, tuvieron sin embargo que maniobrar entre fuertes contradicciones abiertas por los intentos de descentralización de la SEP y la firme oposición de las direcciones sindicales.

Los modos y tiempos para este reajuste político entre el estado y su base de masas están además condicionados por el hecho histórico de la nacionalización de la banca y por una crisis de financiamiento estatal sin precedentes. Sobre la herida de la nacionalización, la administración actual aplica una política de diálogo, hacia las organizaciones empresariales, insinuando o proponiendo tratos preferenciales y acciones "realistas" para controlar la economía. Y sin embargo no todo es claro, la imperiosa recapacitación financiera del estado recae por necesidad en sus fuentes internas de ingresos por la eclosión de sus fuentes externas.

De ahí que se amplíen las fuentes de ingresos que generan menos resistencia social organizada, como el IVA y los precios de los bienes y servicios estatales. A pesar de ello el gasto público se reduce por falta de recursos, a la vez que se espolea la inflación. Es probable entonces que los intentos por sanar la herida de la nacionalización sean interrumpidos por nuevas exigencias

de ampliar recursos estatales aún a costa de perfilar reformas fiscales que afecten los ingresos de los propietarios. La recomposición de relaciones entre el estado y los empresarios se esboza entonces como un proceso accidentado donde el estado sufre un recorte del monto de concesiones (escasez de divisas, reducción de subsidios, encarecimiento de préstamos de capital) que desde hace tiempo suavizan su trato con los grupos capitalistas, capaz de generar fuertes tensiones por una redefinición de las "cuotas" de excedente interno, y que por lo tanto obligue a acercamientos urgentes entre el estado y su base de masas.

Pero si la recesión actual incide en un proceso avanzado de revolución pasiva, también descende sobre la experiencia acumulada por doce años de lucha obrera. Los diversos destacamentos del sindicalismo alternativo, ciertamente dispersos y aún minoritarios, expresan sin embargo en cuanto realidades consolidadas, el progresivo cierre de toda una larga noche de exclusión de la izquierda en los movimientos populares.

El desarraigo social, fruto de la derrota histórica larvada a fines de los treinta y vivida de manera plena a lo largo de tres décadas, empieza a ser superada. Hay en marcha un encuentro con las tradiciones y sabidurías locales y regionales, y la búsqueda de una nueva mirada, al margen de la herencia intelectual reductiva y dogmática, que restituya al país y a las clases su complejidad histórica.

Las múltiples armas que la intensidad de la recesión ofrece a una ofensiva capitalista sin precedentes sobre los derechos obreros, de manera masiva e indiscriminada, obligará sin duda a revisar concepciones, prácticas y programas. Esta es hora propicia para recuperar la iniciativa política en una sociedad cuyas fuerzas sociales no acostumbran esperar pasivas. La densidad social de esta izquierda desunida y el complejo y



dinámico escenario social en que se mueve hace pensables y posibles dos géneros de retos históricos: a) ganar un espacio como fuerza social reconocida, interlocutora ante las direcciones oficiales y ante el estado y b) avanzar en una acumulación de fuerzas, extendiéndose por ramas e industrias, cuyo sentido atienda al progresivo perfeccionamiento de la democracia sindical, capaz de convertir el reclamo democrático en aparatos y prácticas del protagonismo de masas, vía directa para una gestión popular de la política, sembradora de una cultura de autogobierno, raíz profunda de un socialismo democrático.

Lograr sin embargo la conquista de este espacio como fuerza reconocida supone la unidad mínima de las izquierdas y una mayor capacidad de iniciativa política para incidir en los reacomodos de fuerzas, tareas en las que, por decir lo menos, hay enormes rezagos. El tema de la unidad sigue siendo el principal motivo de desunión de las izquierdas, no sólo en su concepción sino en su práctica. Desde 1982, y sólo por atender a la experiencia más inmediata, se ensayan tres "modelos" de unidad: 1) La encabezada por el SUTIN, con la participación de sindicatos universitarios, de Pesca, Aeroméxico, Volkswagen, Tepepan y Kelvinator. Se realizan intercambios de experiencias de lucha que insisten más en coincidencias programáticas, como la necesidad de reorganizar a los sindicatos por sindicatos nacionales de rama industrial, la necesaria correspondencia entre programa sindical y programa nacional, el rechazo a la subordinación estricta de los sindicatos a los partidos, etc.; y menos sobre las experiencias concretas de construcción democrática y de extensión a otros sectores. Los puntos de coincidencia reafirman y enriquecen el programa de los electricistas democráticos que sostiene el Movimiento de Acción Popular. 2) La creación de la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA), matriz del FNDSCAC,

donde sobresale la coordinadora de Ecatepec y diversas organizaciones políticas: Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Punto Crítico, Organización Comunista Proletaria (OCP). Sus primeras resoluciones se centran en acordar tareas de solidaridad a huelgas prolongadas registradas en el perímetro metropolitano. En reuniones posteriores se acentúa la definición de un programa. Es la versión más "ortodoxa" de la unidad que pone por delante las coincidencias en definiciones sobre el estado, la crisis y sus salidas, buscando el diseño organizativo de un núcleo de sindicatos fuera de cualquier contaminación estatal que promueva amplias movilizaciones nacionales. 3) Los intentos de UOI por lograr una coordinación "de masas a masas", centrada en los intercambios de experiencias de lucha con la asistencia masiva de obreros y diversos sindicatos. En una propuesta más elaborada, las secciones mineras proletarias (147, 288 y 27) definen un proceso de construcción de la unidad de acuerdo a información continua sobre objetivos de lucha, experiencias concretas, formación de fondos económicos comunes y concertación de negociaciones conjuntas. La unidad se concibe como *resultado* de éste proceso. La unidad así ejercida, con una probable utilidad en el nivel regional o sectorial y para sostener de modo firme procesos prolongados, se adivina poco flexible para coyunturas que obliguen a concertaciones más amplias sin definiciones propias sobre los grandes problemas del país, para incidir con autonomía en las relaciones de fuerza en el nivel nacional.

La extensión y masificación de la ofensiva capitalista, plantea un terreno más fértil para lograr coincidencias mínimas en defensa de derechos irrenunciables de la clase obrera. En estas condiciones no es difícil pensar en la unidad como tarea posible y actual para la izquierda. Una unidad, sin embargo, capaz de reconocer lo pre-

---

cario de su propio punto de partida y el alcance de sus retos: movimientos diferentes en sus ritmos, formas y tareas. Los que exigen un espacio más amplio y flexible de respeto y ausencia de hegemonías ficticias, de eficiencia para prestar solidaridad inmediata a los conflictos, de necesarios puntos de definición programática sobre la orientación de la política económica, que planteen una clara interlocución ante el estado y ante los posibles reacomodos de las centrales oficiales. De esta manera la unidad puede convertirse entonces en el inicio de un provechoso intercambio de experiencias, fracturador del gremialismo: de agregación, no simple sumatoria, de problemas y perspectivas nacidas en los movimientos concretos, que construyan una vía amplia para que los núcleos democráticos puedan acceder, compartir y luchar por los "grandes temas" de la política económica.

A contrapelo de la imaginación de izquierda construida en el aislamiento social siempre a la espera de la gran ola de descontento popular que barra a este estado, y demande conductores socialistas, la progresiva inserción socialista en los movimientos populares se define, según su experiencia de doce años, como una *acumulación de fuerzas prolongada, que además se bate en una sociedad con segmentos hegemónizados*. En cuanto tal, sugiere problemas y avanza soluciones que implican una refundación teórica y práctica de la izquierda nacional. En sus muy diversas experiencias, y con la clara limitación de algún balance fidedigno de las mismas, esta acumulación de fuerzas prolongada parece decir: existe una búsqueda común por arraigar la *democracia*, como ejercicio de gobierno directo de los trabajadores. En esta búsqueda son valiosas las enseñanzas sobre el desplazamiento de las dirigencias oficiales, pero se desea más, por que se han vivido experiencias de intensa burocratización aún con líderes democráticos. Se desean

conductas de masas, mecanismos de gobierno directo que garanticen, fomenten y eduquen la decisión de masas, que transformen la democracia en cultura popular, arraigada y cotidiana, de gestión de la política. Se explora entonces un problema complejo: cómo desarticular la dominación y a la vez "producir" un sujeto colectivo de decisiones, cómo destruir y construir, a un tiempo. Es en este punto cuando la izquierda puede arribar, en la teoría y en la práctica, al reto mayor de la sociedad y de la política de masas del México contemporáneo: la crítica radical al modo histórico, específico, en que encarna la dominación política burguesa.

El estado inserta a la sociedad de masas en sus aparatos políticos y en la "esfera pública". Pero sus modos de inserción a la vez la integran y subordinan a una *práctica estatal* de gestión política. La crítica habitual de izquierda se centra en la concepción de la dominación como opresión y mistificación-engaño. No puede penetrar el proceso histórico de un estado ampliado donde la dominación política no se concentra sólo en aparatos especializados, sino que existe como redes extensas que interiorizan al estado y a las clases populares, donde la ideología de estado se alimenta de tradiciones y raíces populares, donde la dominación, lejos de estar "fuera" del campo popular, es elemento central de su constitución. Este nudo de aparentes paradojas requiere de una crítica radical que reconozca los mecanismos finos y sutiles de una hegemonía extendida.

El estado mexicano se construye y se extiende asimilando movilizaciones y tradiciones populares. La forma específica de la relación gobernantes-gobernados ha generado una cultura política, (agentes y aparatos), no pocas veces extraída del seno mismo de las movilizaciones populares, especializada en la cooptación de oposiciones y de dirigentes. Su condición: la delega-

ción de los emergentes poderes de masas en "intermediarios" (líder sindical o político, asesor jurídico) que rearticulan la lógica profunda de la política de masas estatal por medio de: canales abiertos para las peticiones de masas, concesiones estatales, desarticulación de la organización social emergente, imposición de las formas delegadas y subordinadas de relación con el estado.

Las experiencias en curso de formas de democracia avanzada, dibujan algunos elementos de resolución, que al calor de la muy probable extensión de la protesta obrera causada por la recesión, podrán crecer y extenderse. La penetración microsocia en fábricas, barrios y municipios, puede entroncar con las muy diversas tradiciones locales y regionales de auto-gobierno. El perfil de la democracia radical apenas empieza a esbozarse. Sus innegables avances en la penetra-

ción y extensión dentro de los sindicatos oficiales, aún dispersos y por sistematizar, la afinación de mecanismos de decisión, información y evaluación colectiva, la construcción de nuevas instancias de participación y de responsabilidad, son pasos profundos pero iniciales. Delante quedan innumerables vías aún por explorar que enriquezcan la gestión colectiva de espacios sociales: la producción y la productividad, la problemática urbana, el gobierno de los municipios "industriales", los problemas de insalubridad y de contaminación, la generación y reapropiación de culturas regionales; todo un horizonte que con facilidad desborda cualquier concepción "obrerista" miope y que replanteará las potencialidades hegemónicas de la fábrica y del sindicato. Son tareas inmensas en un medio aún raquítico, propicio a la desesperanza, pero no olvidemos: toda historia, en su génesis, fue utopía.

- 1) *Proceso*, núm. 327, 7 de febrero de 1983.
- 2) *Uno más Uno*, lunes 21 de febrero de 1983, pp. 1 y 7.
- 3) Jeffrey Bortz, et. al., "Salario y clase obrera en la acumulación de capital en México", *Coyoacán*, año 1, núm. 2, enero-marzo 1978, p. 82.
- 4) Carlos San Juan, "Las dirigencias sindicales en la coyuntura

- actual", en prensa, INAH, 1981.
- 5) Alejandro Montoya, "El movimiento obrero en México: 1977-1978", en *¿La crisis quedó atrás?*, México, FEUNAM, 1980, pp. 175-177.
- 6) Iván Zavala, "La estructura desgarrada", en *El desafío mexicano*, México, ed. Océano, 1982, pp. 217-220.

